



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: PROCESO ESPECIAL DE FUERO SINDICAL –
ASUNTO: APELACIÓN AUTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DEMANDANTE: BIMBO DE COLOMBIA S.A.
DEMANDADO: MIGUEL ALEJANDRO MONTES ROMÁN
SINDICATO: SINALTRABIMBO SUBDIRECTIVA COPACABANA
RADICADO: 050883105 002 2023 00515 01
ACTA: 92

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por las magistradas **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE y ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ** procede pronunciarse en virtud del recurso de apelación interpuesto por la apoderada del demandado frente a la decisión con la cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello no decretó unas pruebas.

A continuación, la Sala previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 92** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, doctora Ana María Zapata Pérez, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

En este proceso se pretende se ordene el levantamiento del fuero sindical del demandado, y en consecuencia se autorice a terminar el contrato de trabajo¹. Notificado el señor MIGUEL ALEJANDRO MONTES ROMÁN y la organización sindical, presentaron contestación oponiéndose a las pretensiones², oportunidad en la que solicitaron, entre otras, las siguientes pruebas: Declaración de parte del presidente de SINALTRABIMBO – Manuel López - y la exhibición de unos documentos³.

El pasado **19 de septiembre de 2023**⁴ el Juez se abstuvo de decretarlas, y para tomar estas determinaciones indicó.

¹ PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01 –

² PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 09 –

³ PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 09 – pagina 46 a 48 -

⁴ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 11 -

Frente a la prueba de **DECLARACIÓN DE PARTE** argumentó que con esa figura se busca es la confesión sobre ciertos hechos, por lo tanto, no es posible que la misma parte la solicite. Respecto a la **EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS** adujo que quien la solicitó lo hizo de manera anti técnica, porque no afirmó cuáles son los hechos que pretende demostrar, conforme lo exige el artículo 266 del CGP. Y agrega, que entre los documentos que pretende la parte sean exhibidos hay un video, que fue decretado como prueba y reposa en el proceso, agregando que, *"en lo demás, la carga de la prueba recae en la demandante quien debe demostrar la existencia de esas causas, pues serán ellos los que deben demostrar si en esa política de datos cumplieron con esa situación"*.

Inconforme con esta decisión, la apoderada MIGUEL ALEJANDRO MONTES ROMÁN y SINALTRABIMBO SUBDIRECTIVA COPACABANA interpuso **recurso de apelación** solicitando la revocatoria, insistiendo en el decreto de las pruebas solicitadas: **i)** Con relación a la DECLARACIÓN DE PARTE, manifiesta que es un medio que no en vano se encuentra en el CGP, es un medio probatorio legal que resulta útil, conducente y pertinente. **ii)** Respecto a la EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS señala que sí se cumple con el requisito exigido en el artículo 266 del CGP, conforme la sustentación efectuada en la audiencia. Aduce que una cosa es el formato contestación que fue entregado al Despacho y otra los argumentos expuestos de manera oral, oportunidad en la que se indicaron las razones por las que es necesaria la exhibición de los documentos, porque se trata de pruebas que se solicitaron en la diligencia de descargos por parte del trabajador, y de una u otra forma están ligadas a demostrar todos los hechos de la contestación a la demanda, incluido el hecho particular de la discriminación sindical de la cual ha sido víctima SINALTRABIMBO. No se insiste en la exhibición del video porque ya fue decretado.

2. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA

Con auto del 3 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación y se corrió traslado a las partes para que intervinieran y ambas lo hicieron⁵.

BIMBO DE COLOMBIA S.A. solicita se confirme la decisión porque las razones en que se sustenta la negativa se encuentran ajustadas a derecho: Sobre la **exhibición documental** porque no se cumplió con los requisitos legales al no detallar de manera precisa los hechos que pretendía demostrar como lo exige el artículo 266 del CGP. Además, porque se trata de documentos irrelevantes para el objeto del litigio que se centra en la existencia de un fuero sindical y la terminación del contrato de trabajo del demandado. La omisión de los requisitos legales hizo que la decisión del juez estuviera en línea con el procedimiento y no

⁵ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 02 a 06

podía corregirse en la etapa del decreto de pruebas, porque debía haberse planteado adecuadamente en la contestación de la demanda. Y sobre **la declaración de parte del Presidente de la Organización Sindical** vinculada al proceso, aduce que la negativa fue rechazada porque el sindicato no es el demandado principal y no tenía relevancia para los hechos en disputa en el caso ya que no aportaría información útil.

La recurrente insiste en la revocatoria de la providencia, resaltando lo siguiente: **i)** La prueba del Código General del Proceso (CGP) adopta un modelo dispositivo en el cual las partes tienen el dominio del procedimiento, y el juez no cumple un papel activo en el desarrollo del proceso, excepto en la adjudicación final. Bajo esta figura jurídica, la parte que esté en una posición más favorable para proporcionar evidencias o aclarar hechos controvertidos debe aportar los documentos o pruebas en su poder. En esta medida, solicitó la exhibición de prueba documental en la audiencia de forma oral y cumplió con la presentación del escrito de contestación de la demanda, desatendiéndose de este modo la contestación oral de la demanda, que debe primar en este asunto. Agrega que tales documentos constituyen una prueba necesaria, útil y pertinente para esclarecer varios puntos, incluyendo la violación de derechos colectivos en el marco de la negociación colectiva, el comportamiento de los preventistas en sus rutas de trabajo, y la legalidad de la toma de fotografías y videos por parte de un individuo en relación con la ley de habeas data. Se sostiene que estas pruebas no están en poder de sus mandantes y serían esenciales para el caso. **ii)** Finalmente, señala que el Juez de instancia no consideró adecuadamente la diferencia entre el interrogatorio de parte y la declaración de parte en los términos del artículo 191 del CGP, norma en la que se establece que la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas. Argumenta que, según la doctrina y jurisprudencia (CSJ STC13366-2021), la declaración de parte es un medio probatorio autónomo que debe ser tenido en cuenta por el juez al tomar una decisión y no existe argumento legal alguno para negar una prueba que según la doctrina resulta ser autónoma y bien distinta del interrogatorio de parte.

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación, por lo que el **problema jurídico** a resolver se contrae a determinar si de acuerdo con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, resulta procedente decretar las pruebas solicitadas por la apoderada de MIGUEL ALEJANDRO MONTES ROMÁN y de SINALTRABIMBO SUBDIRECTIVA COPACABANA relacionada con la **exhibición de unos documentos** y la **declaración del Presidente de la Organización Sindical** vinculada al proceso

3. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL DECRETO DE LA DECLARACION DE PARTE

En criterio de esta Corporación, la decisión adoptada en la audiencia pública del pasado **19 de septiembre de 2023** deberá ser revocada para en su lugar ordenar el decreto de la prueba referida a la declaración del **Presidente de la Organización Sindical** vinculada al proceso, porque la parte sí se encuentra legitimada para solicitar su propia declaración, intervención que materializa el derecho de ser oída en el proceso judicial; siendo conducente en razón de su idoneidad para la demostración de la tesis planteada en la contestación.

Debe señalarse que la **simple declaración de parte** y la **confesión** son conceptos que han sido explicados por la Doctrina a través de una relación género-especie, donde la declaración de parte es el género y la confesión es la especie⁶; en este sentido, la primera de ellas hace referencia a todas las manifestaciones que hace la parte, mientras que la segunda es la declaración de la parte que versa sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o favorezcan a la parte contraria.

Inicialmente, el Código de Procedimiento Civil (CPC)⁷ reguló el régimen probatorio y dispuso expresamente 7 medios de prueba⁸, entre ellos la que denominó **declaración de parte** que se restringía a la confesión –artículo 194 y siguientes- provocada a través del interrogatorio de parte al que era citado por la contraparte –artículo 202 en adelante- Se advierte entonces, que el medio probatorio al que se hacía referencia en el anterior procesal era estrictamente a la confesión, no se preveía la posibilidad de que la parte, por cuenta propia, rindiera su declaración de manera voluntaria, interrogado por su propio abogado ante el juez.

Sin embargo, con la expedición del Código General del Proceso⁹, en que la normativa procesal de nuestro país migró de un sistema predominantemente escrito a uno oral generando entre otros el acercamiento entre juez y las partes el legislador dispuso 9 medios de prueba, dentro de los que se encuentra **la declaración de parte y la confesión**¹⁰, señalándose estos dos de manera independiente. Así, se denominó el capítulo III de la Sección tercera de las pruebas como “DECLARACIÓN DE PARTE Y CONFESIÓN”. Y partiendo

⁶ Hernando Devis Echandía, en “*Teoría General de la Prueba Judicial*” capítulo “Declaración de parte y prueba de confesión”, página 563 y siguientes; obtenido de https://www.corteidh.or.cr/tablas/13421_ti.pdf

⁷ Decreto 1400 de 1970.

⁸ **ARTÍCULO 175. MEDIOS DE PRUEBA.** Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

⁹ Ley 1564 de 2012.

¹⁰ **ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA.** Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. / El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.

de la existencia de estos dos medios de prueba es que deben interpretarse los artículos 191 y siguientes del Código: i) En el **artículo 191** se establecen los requisitos para que la declaración de parte sea tenida como confesión atendiendo a las características especiales de este medio probatorio, y en su inciso final dispone que “La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”; disposición última que no se contemplaba en el CPC. ii) Luego, el **artículo 196** indica que la confesión debe analizarse de manera conjunta, dado que es indivisible; y que por su parte la declaración que verse sobre hechos diferentes a los confesados, debe apreciarse separadamente. iii) Y en el **198** se estipula que el interrogatorio de parte puede ordenarse por el juez de oficio o a solicitud de parte, y no se restringe a que la solicite la contraparte como sucedía en el CPC¹¹.

El anterior entendimiento ha sido ampliamente discutido por la doctrina en los últimos años y a pesar de encontrar posiciones opuestas muy sólidas¹², un sector importante defiende la existencia de los dos medios probatorios argumentando básicamente¹³: **i)** El derecho a ser oído por el juez, que proviene de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos humanos¹⁴, el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos¹⁵ y la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto San José¹⁶. **ii)** El derecho a la defensa como garantía del debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política¹⁷, que se concreta en el derecho de ser escuchado. **iii)** Que,

¹¹ **ARTÍCULO 203. INTERROGATORIO A INSTANCIA DE PARTE.** Dentro de la oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia, cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso. En la segunda instancia el interrogatorio sólo podrá pedirse en los casos señalados en el artículo 361 [...].

¹² Como la tesis del Dr. Ramiro Bejarano Guzmán, según la cual, el CGP no autorizó a la parte a pedir su propia declaración en el proceso; véase columna “La parte no puede pedir su propia declaración”, Ámbito Jurídico – 11 de octubre de 2017.

¹³ Para las siguientes consideraciones se hizo uso de “Cuestiones y opiniones – acercamiento práctico al Código General del Proceso”, de autoría del Dr. Marco Antonio Álvarez Gómez y el “Plan de Formación de la Rama Judicial” de autoría del Dr. Ulises Canosa Suarez. Obtenidos de: <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/6575727/INVEST+CGP+CUESTIONES+Y+OPINIONES+DEF.pdf/320427a7-6ffa-4377-9c25-70853e09b58b> y https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/modulo_pruebas_cgp.pdf

¹⁴ **Artículo 10.** Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

¹⁵ **Artículo 14.** Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. [...]

¹⁶ **Artículo 8.** Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. [...]

¹⁷ **Artículo 29.** El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

tratándose de un sistema judicial predominantemente oral, el derecho a ser oído no puede materializarse en piezas escritas, pues debe tenerse en cuenta el principio de inmediación que rige las audiencias públicas orales. En este sentido, es perfectamente viable que las partes al asistir a audiencias públicas, rindan sus versiones ante el juez, a pesar de que la parte contraria no lo solicite o lo solicite buscando obtener la confesión¹⁸. Al respecto, Ulises Canosa ha destacado:

El nuevo sistema oral supone intensificar en alto grado el contacto entre los sujetos del proceso, también en los aspectos probatorios, desarrollando nuevos mecanismos de averiguación de la verdad. En el sistema esencialmente escrito del CPC el saber de las partes era un instituto aprovechado limitadamente mediante el interrogatorio de la contraparte para provocar la confesión. Ahora ese dicho o saber de las partes incrementa en el CGP su utilidad para la formación del convencimiento del juez, porque podrá usarse como fuente de prueba aunque no sea perjudicial para el declarante, esto es, así beneficie a la propia parte.

iv) Que es el juez quien valora las pruebas bajo los parámetros de la sana crítica y la buena fe del artículo 83 de la Constitución Política, siendo así el operador jurídico quien al momento de dictar sentencia otorgue valor probatorio a la declaración de parte, y teniendo en cuenta el material probatorio restante podrá darle credibilidad. **v)** Finalmente, se argumenta que **la declaración a iniciativa de la propia parte debe ceñirse a las reglas de la prueba testimonial**, pues no se trata de interrogatorio de parte el cual tiene reglas especiales.

Frente a esta discusión, la Corte Suprema de Justicia ha admitido la existencia de los **dos medios probatorios**, valiéndose de argumentos como los anteriormente expuestos: En primer término, diferenciando la simple declaración de parte y la confesión al tenor literal de las normas del CGP:

Sobre esas diferencias, el artículo 165 del Código General del Proceso prevé que «son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento (...), los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez».

Por su parte, el canon 191 del mismo estatuto, luego de mencionar que la confesión requiere, entre otros aspectos, que i) “el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado”, y ii) que “verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria”, establece que “la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”.

A renglón seguido el artículo 196 dispone que “la confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe.

¹⁸ Marco Antonio Álvarez Gómez en “Cuestiones y opiniones – acercamiento práctico al Código General del Proceso”.

Cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquellos se apreciarán separadamente.

Significa, entonces, que las partes pueden rendir su versión sobre los hechos materia de la controversia, algunas veces se tratará de una simple declaración y, en otras ocasiones, de una confesión, lo que, en todo caso, definirá el juez al momento de valorar el relato del interesado, asignándole el mérito correspondiente.¹⁹

(Negrita propia)

En segundo término, porque el régimen probatorio en nuestro país se funda en la apreciación razonada de la prueba, debiendo el juez ponderar la evidencia y sopesarla según las reglas de la experiencia, la lógica y la sana crítica; pudiendo así el juez valorar las manifestaciones de la parte para cotejarlas con el resto de acervo probatorio y construir la convicción necesaria para el silogismo judicial. Al respecto:

Quién mejor que la propia parte, que es la más interesada en las resultas del pleito, para narrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos cuya averiguación es pieza clave para su resolución. A fin de cuentas, es ella quien los conoció mejor que nadie y, por ende, está en mejores condiciones de recordarlos, sobre todo porque es la protagonista en la controversia, lo que hace que su versión sirva para aclarar lo ocurrido si de ella se logran extraer los frutos debidos.²⁰

Y si bien advierte la Alta Corporación que la parte tiene intereses en las resultas del juicio, ello no es óbice para que el juez **atienda la declaración, la aprecie en su contexto según las máximas de la experiencia, las reglas de la sana crítica y en armonía con los demás medios probatorios**²¹, buscando en todo caso valorar objetivamente su credibilidad. Si el relato brindado por la parte resulta coherente, contextualizado y puede ser corroborado en el proceso con documentos u otros medios de prueba, es digno de credibilidad y puede servir para esclarecer los hechos objeto de debate. Así:

En tal caso, debe el juez ser mucho más analítico y prescindir de cualquier valoración subjetiva respecto del declarante, como por ejemplo sus reacciones, la firmeza de la voz, su vestimenta, su seguridad, etc., para darle paso a una apreciación más metódica y reflexiva en la que le preste mayor atención al contexto y al contenido de la reconstrucción factual hecha por la parte, así como a la coincidencia de su narración con otros medios para saber si es verosímil.²²

Sobre el particular, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha hecho énfasis en que estas declaraciones deben analizarse bajo el postulado de que ninguna de las partes puede crear su propia prueba y advirtió:

Lo anterior, sin que se desconozca que el **artículo 191 de CGP**, tiene a la declaración de parte como un medio de convicción válido para soportar la sentencia, pero imponiendo al Juez el deber de valorarla de acuerdo a las reglas generales de apreciación de la prueba, esto es, de manera sistemática, lógica y razonable con las demás.²³

¹⁹ STC 13366 de 2021.

²⁰ STC 9197 de 2022.

²¹ STC 13366 de 2021. Luego, sobre la forma de valorar la confesión, la Corte se remite a los requisitos plasmados en el artículo 191 del CGP.

²² STC 9197 de 2022.

²³ SL 4291 de 2020.

Finalmente, analizando la normatividad que soporta esta figura, la Sala de Casación Civil ha expresado:

Es tan **relevante, pertinente y necesaria la declaración de la parte en el proceso jurisdiccional, que el Código General del Proceso, expedido en coherencia con los postulados y principios que sirven de faro al Estado Constitucional y Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista implementado en la Carta Política de 1991, la positivizó, y lo hizo cuando autorizó a cada litigante para brindar al proceso su versión de los hechos y previno al juez para que la valore en comunión con las demás pruebas.**

Nótese cómo en el artículo 165, referido a los medios de prueba, distinguió entre declaración de parte y confesión, lo que reafirmó en el artículo 198 cuando estableció que *«el juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso»* y reiteró al final de ese precepto al consagrar que *«la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo a las reglas generales de apreciación de las pruebas»*.

Con ello **no solo desterró la restricción impuesta por el derecho romano y medieval, sino que le dio carta de naturaleza propia a la declaración de parte y primacía al derecho superlativo que tiene toda persona a ser oída por el funcionario que la va a juzgar**, sin necesidad de que el juez o su contraparte la llamen a interrogatorio, sino por su propia iniciativa, lo que concuerda con el artículo 29 de la Constitución Política que consagra el debido proceso dentro del cual se halla ínsito el derecho de defensa y contradicción, así como la garantía que tiene todo justiciable para ser escuchado y que está prevista en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [...]

Por consiguiente, en el caso objeto de control constitucional el fallador debió apreciar libremente la exposición factual de los demandados y valorarla acorde con las pautas trazadas en el estatuto procesal, a fin de cotejar su contenido con los demás elementos de prueba obrantes en el infolio y extraer, de ese escrutinio, el mayor convencimiento posible y útil para zanjar la pendencia. Como no lo hizo, incurrió en un defecto fáctico que habrá que remediar.²⁴

Y ya verificados los planteamientos que se esbozan en la contestación, la prueba solicitada resulta conducente, mal puede imponerse a la parte que se defienda exclusivamente por escrito, pues con ello se desnaturaliza la oralidad propia de nuestro procedimiento que implica que las pruebas se permeen por el postulado de la inmediación, pudiendo la parte dar su versión de los hechos a través de la simple declaración.

Finalmente, debe destacarse que, en el contexto del proceso especial de **fuero sindical, en el que de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 B** del Código Procesal del Trabajo, la organización Sindical de la cual emana el fuero que sirva de fundamento a la acción, por conducto de su representante legal podrá intervenir en el proceso y efectuar los actos procesales permitidos para el trabajador aforado, salvo la disposición del derecho en litigio. Así, dadas las particularidades del caso, mal puede privarse al representante legal de dar su versión del asunto, aunque BIMBO DE COLOMBIA S.A. no lo haya llamado a absolver interrogatorio.

²⁴ STC 9197 de 2022.

Es en estos términos que deberá REVOCARSE la decisión que se revisa, para en su lugar ORDENAR que se decrete la declaración de parte solicitada.

4. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL DECRETO DE LA EXHIBICIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

Para efectuar el análisis, debe partirse de las siguientes premisas: En materia laboral²⁵ son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley²⁶ útiles para la formación del convencimiento del juez.

Y es claro que el Juez tiene la facultad de rechazar las pruebas inconducentes o superfluas²⁷, por lo que debe la parte argumentar la pertinencia de la prueba que solicita y exponer lo que se pretende demostrar con el medio probatorio. Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha adoctrinado que es competencia exclusiva del juez analizar la validez, aptitud, pertinencia y conducencia de las pruebas solicitadas, que darán pie a la formación de su convencimiento y serán el sustento de la decisión del litigio²⁸:

En consecuencia, la negativa a ordenar la práctica de determinadas pruebas “sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas (...)”²⁹.

Ahora bien, debe destacarse que a diferencia del proceso ordinario laboral en el que se consagra un término para presentar la contestación por escrito, en una etapa previa a la realización de la audiencia pública³⁰; el de fuero sindical tiene un trámite especial y concentrado, según el cual, si bien con la notificación personal del auto admisorio al demandado y a la Organización Sindical vinculada al proceso, la **contestación se efectúa en audiencia pública**:

ARTICULO 114. TRASLADO Y AUDIENCIAS. <Artículo modificado por el artículo 45 de la Ley 712 de 2001 Recibida la demanda, el juez en providencia que se notificará personalmente y que dictará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, ordenará correr traslado y citará a las partes para audiencia.

²⁵ En el proceso laboral, la oportunidad de solicitar las pruebas es la presentación de la demanda, la contestación y la corrección de la demanda. Estas deben ser decretadas o negadas por el juez en la etapa del decreto de pruebas del artículo 77 del CPTSS y en el caso de rechazarla debe hacerlo mediante decisión motivada en los términos del artículo 53 del CPTSS.

²⁶ Art 51 CPTSS. **MEDIOS DE PRUEBA.** Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial sólo tendrá lugar cuando el Juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales.

²⁷ Art 53 CPTSS. **RECHAZO DE PRUEBAS Y DILIGENCIAS INCONDUENTES.** El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito.

²⁸ Sentencia T-452 de 1998.

²⁹ Sentencia T-393 de 1994, MP. Antonio Barrera Carbonell.

³⁰ Artículos 31, 74, 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo

Dentro de esta, que tendrá lugar dentro del quinto (5o.) día hábil siguiente a la notificación, el **demandado contestará la demanda y propondrá las excepciones que considere tener a su favor**. Acto seguido y en la misma audiencia se decidirá las excepciones previas y se adelantará el saneamiento del proceso y la fijación del litigio.

A continuación, y también en la misma audiencia se decretarán y practicarán las pruebas y se pronunciará el correspondiente fallo. Si no fuere posible dictarlo inmediatamente, se citará para una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de los dos (2) días siguientes. (Negrillas fuera de texto)

Verificada la actuación, se advierte que con providencia del **8 de septiembre de 2023** se admitió la demanda, se ordenó la notificación del auto admisorio al señor MIGUEL ALEJANDRO MONTES ROMÁN y SINALTRABIMBO SUBDIRECTIVA COPACABANA y en relación con la contestación de la demanda se indicó lo siguiente:

CUARTO. ADVERTIR al demandado y al sindicato, que deben contestar la demanda antes o en la **AUDIENCIA DE DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS, SANEAMIENTO, FIJACIÓN DEL LITIGIO, DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS**, que realizará el **DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 AM)**, las cuales se realizarán de manera virtual a través de aplicativo LIFESIZE.

Es así como, en el curso de la audiencia, con correo electrónico de las 11:22 la apoderada allega escrito de contestación en el que solicitó el decreto de diversos medios probatorios, entre ellos lo siguiente³¹:

EXHIBICION DE DOCUMENTOS

En virtud del Artículo 31 del Código Procesal del trabajo y seguridad Social modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001, solicitó de la manera más respetuosa para que se requiera a la parte demandante que allegue al Despacho los siguientes documentos:

1. *Sírvase allegar informe de estado de negociación colectiva*
2. *Sírvase allegar informe de estado de aplicación pacto colectivo y desde cuando inicio para la presente vigencia.*
3. *Se allegue comprobante del área de ventas y de liquidación que certifique 1. Porque los trabajadores preventistas salieron en su motocicleta desde las 7:00 am a 9:00 a.m, 2. Se allegue reporte de administración que dé cuenta de la liquidación de las rutas en la jornada endilgada. 3. Se allegue reporte de la programación de los clientes que se tenía previsto visitar. 3. Se allegue reporte del área de venta de consumo que dé cuenta porque razón no pudo ejecutar su operación. 4. Reporte de terceros que dé cuenta que pasó con las entregas previstas en dicha oportunidad.*
4. *Se allegue copia formal de la política de habeas data vigente al interior de BIMBO SA, y que dé cuenta que el señor RONALD RODRIGUEZ es una persona facultada por ley 1581 de 2012, para tomar fotografías, videos, manipular datos sensibles de mi mandante*
5. *Se allegue comprobante formal que dé cuenta que dicha designación del señor Rodríguez fue socializada a mi mandante.*
6. *Copia íntegra del video de seguridad tomado por la compañía desde las 4:00 am hasta las 12:50 m, que dé cuenta de todos y cada uno de los movimientos generados en las áreas objeto de reproche.*

³¹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 09-

7. Allegue acta de autorización de tratamiento de datos sensibles
8. Allegue acta de socialización protector y tenedor de datos sensibles
9. Allegue constancia de señalización de espacios de grabación

En punto a la procedencia de esta prueba, es pertinente verificar el contenido del **artículo 265 del C.G.P.** que reza:

“La parte que pretenda utilizar documentos o cosas muebles que se hallen en poder de otra parte o de un tercero, deberá solicitar, en la oportunidad para pedir pruebas, que se ordene su exhibición”.

A su turno, el **artículo 266** de la misma codificación señala frente al trámite de dicha exhibición:

“Quien pida la **exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos**. Si la solicitud reúne los anteriores requisitos el juez ordenará que se realice la exhibición en la respectiva audiencia y señalará la forma en que deba hacerse.

Cuando la persona a quien se ordena la exhibición sea un tercero, el auto respectivo se le notificará por aviso.

Presentado el documento el juez lo hará transcribir o reproducir, a menos que quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente. De la misma manera procederá cuando se exhiba espontáneamente un documento. Si se trata de cosa distinta de documento el juez ordenará elaborar una representación física mediante fotografías, videgrabación o cualquier otro medio idóneo”. **Subraya fuera de texto**

Es el aparte normativo subrayado, el que no encuentra configurado el Juez de primer grado para acceder al decreto de la prueba, pero en criterio de esta corporación, tal decisión deberá ser revocada por lo siguiente:

En **primer lugar**, ya se ha indicado que en el marco del proceso especial de fuero sindical, la contestación de la demanda se realiza **en audiencia pública**, oportunidad en la que la apoderada de MIGUEL ALEJANDRO MONTES ROMÁN y de SINALTRABIMBO SUBDIRECTIVA COPACABANA presentó el escrito que contiene la contestación, intervino oralmente para contestar la reforma de la demanda, y además explicó con suficiencia, las razones en que sustenta la petición de exhibición de documentos.

En **segundo término**, en relación con las normas que reglan la interpretación de estas normas, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: **i)** El derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad ante la ley, es un freno eficaz contra la arbitrariedad y por ello es un error pretender que en un Estado de derecho se puede administrar justicia con olvido de las formas procesales, sin embargo, se debe tener cuidado de no llegar al extremo en el que el Juez desconozca la prevalencia del derecho sustancial,

para dársele al formalismo o ritualismo que no es adecuado para el caso en concreto y por esa vía deniega o vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia, contrariando lo previsto en el **artículo 228 de la Carta Política; ii)** La Corte Constitucional en su amplio precedente ha enseñado³² que uno de los casos en los que se vulneran los derechos fundamentales a la igualdad de las partes, el debido proceso y el acceso material a la administración de justicia, cuando una decisión judicial sacrifica derechos sustanciales en virtud del cumplimiento de los ritos o formas procesales, o en otras palabras, cuando el procedimiento es una barrera para la eficacia del derecho sustancial, circunstancia que se presenta cuando se exige el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias pueden constituir cargas imposibles de cumplir para las partes; **iii)** La Alta Corporación ha reiterado que se presenta exceso ritual manifiesto cuando el funcionario judicial no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos; cuando renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales"

Finalmente, debe destacarse que cuando se pretende analizar si con la decisión judicial se ha incurrido en un **exceso ritual manifiesto** debe mirarse de manera muy rigurosa en cada caso concreto, para identificar si el juez adoptó una conducta procesal excesiva, o si está haciendo uso del procedimiento de una manera pura y simple.

Pues bien, para esta corporación es claro que esta figura no puede convertirse en una herramienta para corregir negligencias en el cumplimiento de las cargas procesales que tienen las partes; pero verificada la actuación en los términos analizados, se advierte que se acredita con suficiencia que en este caso se han expresado los hechos que se pretenden demostrar, haciendo referencia incluso al hecho de que se trata de pruebas que **se procuraron obtener directamente de la activa de manera infructuosa**; identificándose además, a partir de los argumentos esbozados en la contestación, la idoneidad, pertinencia y conducencia de los documentos pedidos.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que impone revocar lo decidido, para en su lugar ordenar que se decreta la referida prueba. Y al salir avante el recurso de apelación, no se causan costas de conformidad con lo preceptuado en el numeral 1º del Art. 365 del C.G.P.

³² T- 1306 de 2001, T-1123 de 2002, T-950 de 2003, T- 289 de 2005, T-264 de 2009, T-429 de 2011, SU-636 de 2015.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

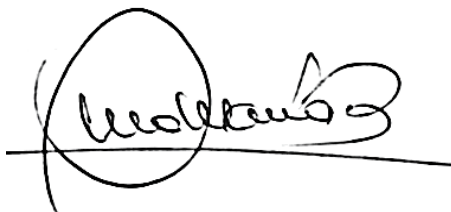
PRIMERO: REVOCAR la decisión para en su lugar ORDENAR que se decrete la declaración del señor Héctor Manuel López Gómez, representante legal de SINALTRABIMBO SUBDIRECTIVA COPACABANA, así como la exhibición de los documentos solicitados en la contestación, de acuerdo con el análisis efectuado en la parte motiva.

SEGUNDO: No se causaron costas

Lo anterior se notifica por ESTADOS. Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Las Magistradas,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE
SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados No. 194 del 14 de noviembre de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>